

NUE 68-A-2019 (AC)

Hernández Olmedo contra Municipalidad de San Salvador

Resolución definitiva

INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del dieciséis de septiembre de dos mil diecinueve.

Por medio de auto emitido por este Instituto se requirió a **Mauricio Antonio Hernández Olmedo** y a la **Municipalidad de San Salvador**, que en el plazo de tres días hábiles manifestaran si ofrecerán prueba que no conste en el expediente administrativo del trámite de solicitud de información, o que resulte imprescindible la aportación de prueba diferente a la documental.

En fecha 9 de agosto del presente año, Sonia Marjori Portillo de Paredes, remitió escrito en el cual expone que la Municipalidad no presentará ninguna prueba además de lo que consta en el expediente administrativo. Por su parte, el apelante no emitió pronunciamiento alguno pese haber sido notificado en legal forma.

Descripción del caso:

El 01 de abril del presente año, **Mauricio Antonio Hernández Olmedo**, presentó una solicitud ante Unidad de Acceso a la Información Pública y Transparencia de la **Municipalidad de San Salvador**, en la que requirió: "copia del contrato de trabajo del Sr. Yovani Adalberto Amaya Espinoza, motorista de compactados del Departamento de Desechos Sólidos".

Por su parte el Oficial de Información resolvió: "denegar la información solicitada, por ser dicha información de carácter confidencial".

En ese contexto, **Hernández Olmedo** interpuso recurso de apelación. mismo que fue admitido por este Instituto, designado su instrucción al Comisionado José Alirio Cornejo Najarro.

En fecha 17 de mayo de 2019, el apoderado de la **Municipalidad de San Salvador**, remitió el informe de ley respectivo; expresando que: “en ningún momento se ha pretendido de parte de la Municipalidad, ocultar o denegar la información solicitada; pues el oficial de información pronunció resolución denegando la copia simple del contrato, por no ser el peticionario, el titular de la información requerida, y contener la misma datos personales”.

Durante la instrucción, se celebró audiencia de avenimiento con las partes; sin embargo, no fue posible llegar a acuerdo alguno sobre la entrega de la información.

Análisis del caso:

El presente caso se regirá bajo el orden lógico siguiente: **I)** principio de máxima publicidad; **II)** límites del derecho de acceso a la información; y, **III)** aplicación al caso concreto.

I. El principio de máxima divulgación ha sido reconocido en el sistema interamericano como un principio rector del derecho a buscar, recibir y difundir información contenido en el artículo 13 de la Convención Americana. En este sentido, tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han establecido que el derecho de acceso a la información debe estar regido por el “principio de máxima divulgación”¹. Asimismo, el numeral 1 de la resolución CJI/RES.147 (LXXIII-O/08) (“Principios sobre el Derecho de Acceso a la Información”) del Comité Jurídico Interamericano ha establecido que, “[t]oda información es accesible en principio. El acceso a la información es un derecho humano fundamental que establece que toda persona puede acceder a la información en posesión de órganos públicos, sujeto solo a un régimen limitado de excepciones²”.

El Art. 4 letra “a” de la LAIP, establece el principio de máxima publicidad como rector del acceso a la información pública, el cual demanda que la información en poder de los entes obligados es pública y accesible y sometida a un régimen limitado de

¹ Corte I.D.H., Caso Claude Reyes y otros Vs. Chile. Sentencia de 19 de septiembre de 2006. Serie C No. 151, párr. 93; Corte I.D.H., Caso Gomes Lund y otros (Guerrilha do Araguaia) Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C No. 219. Párr. 230.

² CJI/RES. 147 (LXXIII O/08), Principios sobre el derecho de acceso a la información, 7 de agosto de 2008. Punto resolutivo 7. Disponible en: http://www.oas.org/cji/CJI_RES_147_LXXIII_O_08.p

excepciones. En ese orden de ideas, para garantizar dicho principio y el de disponibilidad, la LAIP configuró un procedimiento sencillo y expedito que facilite el acceso de la información pública a toda persona.

Asimismo, la CIDH, se ha manifestado sobre el principio de máxima publicidad, en el sentido que: “en una sociedad democrática es indispensable que las autoridades estatales se rijan por el principio de máxima divulgación, de manera que toda la información en poder del Estado se presuma pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones”³.

También, se puede interpretar que los tres efectos del principio de máxima publicidad frente a la información que produzca, administra o se encuentra en poder de los entes obligados⁴, son que: a) el derecho de acceso es la regla y el secreto es la excepción⁵; b) la carga probatoria para justificar cualquier negativa de acceso a la información debe recaer al órgano que fue solicitada⁶; y, c) preeminencia del derecho de acceso a la información en caso de conflictos de normas o faltas de regulación⁷.

II. La LAIP define como información confidencial de acuerdo al Art. 6 letra “f”, como *“aquella información **privada** en poder del Estado cuyo acceso público se prohíbe por mandato constitucional o legal en razón de un **interés personal** jurídicamente protegido”* (resaltado suplido).

De lo anterior, es importante resaltar que dicha disposición contiene ciertos elementos para considerar que la información es confidencial, el primero que sea privada, pero además que pueda ser protegible en razón de interés personal.

No obstante, este tipo de información tampoco es absoluta y cede ante intereses constitucionalmente relevantes, siempre que el impedimento de acceso esté justificado. En todo caso, debe interpretarse de modo restrictivo.

³ CIDH- Caso Gomes Lund y otros Vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010. Serie C, N° 219, párrafo 230.

⁴ El Art. 7 de la LAIP, contiene quienes son los entes obligados a la mencionada ley.

⁵ Relatoria especial para la libertad de expresión, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “El Derecho de Acceso a la Información en el marco jurídico interamericano, segunda edición. 2012.

⁶ Ídem

⁷ Ídem



III. Una vez establecido lo anterior, es importante señalar que la municipalidad no incorporo prueba alguna, diferente a lo que consta en el expediente administrativo. En dicho expediente, se encuentra la resolución emitida por el oficial de información, quien expuso que la información es de carácter confidencial, y al no ser el peticionario el titular de dichos datos, se deniega el acceso a la misma.

En el presente caso, la información requerida corresponde a información referente al instrumento jurídico por medio del cual, la administración pública establece una relación laboral con una persona natural, por lo que dicho documento, no es de naturaleza privada, sino pública, pues dicha calidad se reviste por uno de sus intervinientes; el Estado, cuyos actos están revestidos por el principio de máxima publicidad.

Este Instituto, de acuerdo a la sana critica considera que dicho documento, puede tener en su contenido datos personales sensibles del servidor público, que no revisten un interés público, por lo que, su resguardo es necesario para evitar cualquier tipo de efectos negativos, salvaguardando su seguridad jurídica, en consecuencia se deberá brindar una “versión publica” de la información requerida por el ciudadano, en la cual deberán suprimir datos personales sensibles, propios de la vida privada de sus titulares que solo atañen a ellos, tales como número de Documento Unido de Identidad, Número de Identificación Tributaria, números de cuentas bancarias, beneficiarios, dirección de residencia o aquellos de similar naturaleza.

Decisión del caso:

Por tanto, de conformidad con las razones antes expuestas y disposiciones legales citadas, y los artículos 6 y 18 de la Constitución, 52 inciso 3 °, 58 letras b, d y g; 94 y 96 letra “d” de la LAIP; y, 79 y 80 del Reglamento de la LAIP, este Instituto resuelve:

a) **Revocar** la resolución emitida por el oficial de información de la **Municipalidad de San Salvador**, bajo la referencia 139-UAIP-2019, de fecha dos de abril de dos mil diecinueve.

b) **Ordenar** al titular de la **Municipalidad de San Salvador**, que a través de su oficial de información, en el plazo de cinco días hábiles contados a partir del día siguiente a

la notificación de esta resolución, entregue la versión publica de "copia simple del contrato de trabajo del Sr. Yovani Adalberto Amaya Espinoza, motorista de compactado del Departamento de Desechos Sólidos".

c) **Requerir** al titular de la **Municipalidad de San Salvador** que en el plazo de veinticuatro horas, luego de fenecido el plazo del literal anterior, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección de **oficialreceptor@iaip.gob.sv**.

d) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos, dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

e) **Remitir** el presente expediente a la **Unidad de Cumplimiento** de este Instituto, para que verifique la ejecución de esta resolución.

f) **Publíquese**, oportunamente

Notifíquese.-

PRONUNCIADA POR LAS COMISIONADAS Y LOS COMISIONADOS QUE LA SUSCRIBEN.

XT/CC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los nueve días del mes de octubre de dos mil diecinueve.

José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

Página 5 de 5



